

Número 1/2012. Derecho y cultura

DERECHO DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: REGULACIÓN, CONFLICTOS Y ALGUNAS REFLEXIONES

FRANCISCO JOSÉ VALENTÍN RUIZ

MARIANA LÓPEZ HURTADO

Abstract: La información sobre los procedimientos que afectan a los ciudadanos y sobre la actuación de las administraciones públicas es fundamental para alcanzar la transparencia administrativa y lograr una democracia más participativa. Por este motivo se analiza la regulación del derecho de acceso a la documentación pública en comparación con las excepciones impuestas, entre otros, por el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Además se estudian los criterios impuestos por algunos de los responsables de autorizar la consulta de los documentos y se describen algunas de las cuestiones que dificultan el ejercicio del acceso a la documentación por parte de los ciudadanos. Finalmente se proponen algunas soluciones a los problemas de acceso descritos.

Palabras clave: Acceso a los documentos; Derecho de acceso; Derecho al honor; Derecho a la intimidad; Derecho a la propia imagen; Transparencia administrativa; Patrimonio documental; Protección de datos; Agencia Española de Protección de Datos

INTRODUCCIÓN

La crisis económica en la que se encuentra sumida España desde hace varios años ha supuesto para los ciudadanos un recorte progresivo en las prestaciones que las administraciones públicas venían asumiendo. Esto es un hecho innegable y hasta cierto punto lógico pues si la capacidad presupuestaria se reduce esta necesariamente repercute en los servicios, lo que al fin y a la postre se traduce en una limitación de los derechos de la ciudadanía.

Por tales circunstancias, en estas situaciones es cuando se hace más necesaria la tan citada transparencia de los órganos públicos. Y es lógico, no se puede exigir al ciudadano continuos incrementos de la presión impositiva y, a la vez, no ofrecerles la opción de que auditen la gestión de los organismos de Derecho Público. Es lo que se denomina el derecho a una buena administración que se recoge en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de la que hablaremos más adelante. En palabras de Sendín García¹:

La necesidad de transparencia en la actuación pública es una exigencia irrenunciable en las sociedades modernas, en las que suele considerarse la concurrencia de dicho factor como un elemento consustancial a la democracia.

Esta transparencia por fin ha comenzado a calar en las principales instituciones del Estado, y aunque hemos tenido que esperar a que se produzca una situación límite casi insostenible, lo cierto es que estas medidas siempre son positivas y una vez iniciadas no deben abandonarse.

Ejemplos de esta transparencia los encontramos en el Congreso y el Senado, que publicaron en septiembre de 2011 sendas declaraciones de los bienes, actividades y rentas de los diputados y senadores² respectivamente. Por su parte, la Casa Real dio a conocer, por primera vez desde 1979, su desglose del presupuesto³ (la partida asignada en los Presupuestos Generales del Estado era pública pero no así los conceptos en los que se empleaba). Lo que sorprende de estas situaciones es que no

¹ SENDÍN GARCÍA, Miguel Á.: «El derecho de acceso a los documentos administrativos: un instrumento esencial para la participación ciudadana. Derecho estatal y local», en *Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica (REALA)*, n.º 294-295, 2004, pp. 385-437.

² Registro de actividades, bienes y rentas de los diputados. Disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/registro_intereses y Registro de actividades, bienes y rentas de los senadores. Disponible en: http://www.senado.es/legis10/senadores/ra_lista.html.

³ «Desglose presupuestario», en: *Casa de Su Majestad el Rey*, 28 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.casareal.es/noticias/news/20111228_desglose_presupuestario-ides-idweb.html.

se haya planteado hasta ahora y que esta exigencia pública aún no haya recibido el conveniente desarrollo legislativo. No obstante aún es mucha la información que los poderes públicos deben desvelar de su funcionamiento, y aunque este es el primer paso, es necesario continuar avanzando pues como indica Guichot⁴:

[E]l acceso y la difusión de la información administrativa son condiciones para una profundización en la democracia efectiva, esto es, presupuestos necesarios para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y la transparencia en el ejercicio del poder público.

Todo ello, transparencia y a la vez posibilidad de acceso y difusión de la información, es lo que se ha dado en llamar *buena administración*, concepto recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que incluye los derechos de los ciudadanos a acceder a expedientes que les afecten dentro de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. Estos asuntos que «les afecten» no sólo deben entenderse como relacionados con su persona, sino que también son aquellos relativos al interés general, como por ejemplo las políticas culturales, medioambientales, etc. Esta información también es básica para esa transparencia a que nos referíamos y para la subsecuente consecución de una democracia más participativa.

Así pues, analizada de forma genérica la necesidad de la información para el ejercicio democrático, en este artículo nos centraremos en los aspectos relacionados con el derecho de acceso de ciudadanos a la información y cómo este puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.

REGULACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO

Hemos omitido deliberadamente la materia sobre la que se regula el derecho de acceso en el encabezamiento de este apartado porque trataremos de poner en conjunción el derecho a la cultura y el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Ambos derechos están regulados en la Constitución, uno en el artículo 44 (acceso a la cultura e investigación científica) y otro en el 105 (el acceso a la documentación administrativa). Aunque es de destacar que el derecho a la información recogido en el artículo 20 también tiene estrechos vínculos con el derecho de acceso, con el derecho a la cultura y con la regulación en materia de protección de datos que veremos más adelante. Un ejemplo de estas relaciones lo encontramos en

⁴ GUICHOT, Emilio: «Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos personales», en *Revista de Administración Pública*, n.º 173, 2007, pp. 407-445.

la libertad de producción científica que, en muchos casos y especialmente en las ciencias sociales, depende de los documentos administrativos contenidos en los archivos para que los investigadores desarrollen sus trabajos.

Pero a la vista de la regulación constitucional, debemos analizar cómo los poderes públicos han resuelto el mandato de la tutela del acceso a la cultura. Y puesto que estamos hablando de transparencia y de democracia dejemos a un lado el acceso a bibliotecas y museos y centrémonos en los archivos, quizá los grandes olvidados de las instituciones culturales. Pues bien, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico, regula la consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español a que se refiere su artículo 49.2. Pudiera parecer que este aspecto del patrimonio queda apartado del asunto del que hablábamos en la introducción (democracia participativa) por entenderse que «el patrimonio» aunque sea documental, necesariamente debe quedar alejado en el tiempo de las épocas más recientes. Sin embargo, el análisis de la definición de patrimonio documental nos despeja cualquier duda, pues como dice el citado artículo 49.2:

Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios...

El aspecto clave de la definición es el apunte «de cualquier época». Por tanto no solo se está teniendo en cuenta la documentación «más antigua» contenida en nuestros archivos y que puede servir como base para la realización de investigaciones historiográficas de todo tipo, sino que, además, un ciudadano interesado en conocer el funcionamiento de los servicios públicos podría consultar este patrimonio documental (documentación reciente) simplemente teniendo en cuenta las limitaciones que la propia Ley de Patrimonio establece para el acceso a estos documentos. En este sentido el artículo 57 indica que los documentos pertenecientes al Patrimonio Documental Español serán, en general, de libre consulta una vez concluida su tramitación y depositados y registrados en los archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público. Evidentemente quedan fuera del alcance de esta consulta los documentos que afectan a la seguridad y defensa del Estado y aquellos que contienen datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que

puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen.

De los documentos con estas características, es decir, los que contienen datos de carácter personal que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, etc., la ley establece que no pueden ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos⁵. Sin embargo, ¿todos los datos personales afectan a la seguridad, al honor, a la intimidad o a la propia imagen? y ¿acaso no existen consultas legítimas que los ciudadanos puedan hacer sobre documentos que contengan datos personales incluso aunque estos plazos a que se refiere la ley no hayan transcurrido?

En respuesta a estas preguntas cabe decir que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula «el derecho de los ciudadanos a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos que le afectan» (artículo 35.a). Pero además indica, en el artículo 37.3, que:

El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

Como veremos este aspecto tendrá un papel fundamental a la hora de permitir el acceso de los ciudadanos a los documentos incluso aunque se trate de registros en los que aparecen datos personales de terceros, siempre y cuando el ciudadano sea parte interesada⁶.

⁵ Además, estos plazos no son absolutos puesto que los establecidos por la Ley de Patrimonio son aplicables a la documentación de la Administración General del Estado y de forma subsidiaria a la de las comunidades autónomas que también han definido sus legislaciones propias en materia de patrimonio. En general, las autonomías han decidido trasladar los plazos de la Ley de Patrimonio, pero existen excepciones: Andalucía, Canarias y Castilla y León. FARIÑA PESTAÑO, Febe I.; DÍAZ FARIÑA, Fernando A. y RODRÍGUEZ ACEVEDO, José M.: «¿Archivos al servicio del ciudadano? Paradojas y contradicciones de una legislación restrictiva e ineficaz», en *Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)*. Disponible en: <http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/Articulos-Infornes/ComunicacionJMRA.pdf>.

⁶ Existe normativa reguladora de determinados aspectos de la documentación en manos de las administraciones públicas que no analizaremos aquí porque, sin duda, configuran en sí mismos trabajos de gran envergadura, pero que, al menos, citaremos: Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública; Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que

Enlazando con el principio de buena administración decíamos que el derecho de los ciudadanos a conocer de los trámites que le afectan es fundamental en las sociedades democráticas. Castillo Badal⁷ opina a este respecto que la eficacia de este derecho como mecanismo de control de la actuación administrativa subyace, de la posición del interesado en relación a su derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, y al mismo tiempo su derecho a ser informados del funcionamiento de las administraciones.

Ahora bien, la dificultad estriba en que los ciudadanos logren esa información acerca del funcionamiento de las administraciones públicas o simplemente el acceso a los documentos de los que estas son depositarias (y no dueñas) simplemente por el hecho de tener derecho a esa información y aunque no estén directamente implicados en el procedimiento administrativo. Gran parte de la información que generan las administraciones afecta a los ciudadanos de forma indirecta (proyectos de construcción de infraestructuras, política energética, etc.) y deben poder acceder a ella. En estos aspectos entrarán en juego los datos personales que, irremediablemente chocarán con la regulación del acceso.

REGULACIÓN DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es uno de los derechos fundamentales recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española capaz de imponer límites a otros derechos como el de expresión, o el de producción y creación literaria, artística, científica y técnica⁸. Tal y como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/2000:

El derecho fundamental a la intimidad reconocido por el artículo 18.1 tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares.

Esta es la razón de tratar este tema aquí: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen impone límites al acceso. Pero no debemos tratarlo como un límite

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

⁷ CASTILLO BADAL, Ramón: «Acceso a archivos y documentos administrativos», en *Enciclopedia Jurídica La Ley*, tomo I, pp. 128-132.

⁸ Artículo 20.4 de la Constitución Española: «Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia».

absoluto sino que cualquier restricción a cualesquiera otros derechos, incluidos el de acceso y el de información debe ser necesaria y proporcionada. Y aún así, no debe descartarse la prevalencia de estos últimos cuando el interés público así pudiera determinarlos⁹.

En la actualidad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPDCP), y el Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla, constituyen la normativa española básica en materia de protección de datos y, por ende, en lo que concierne a la regulación de los derechos fundamentales que venimos analizando en este apartado. Como veremos, en torno a la regulación de estos derechos fundamentales ha surgido una enorme controversia por parte de los archiveros, responsables de permitir el acceso a la documentación¹⁰ que ante el temor de incurrir en una vulneración de derechos tipificada como infracción en la normativa de protección de datos, prefieren impedir el acceso de ciudadanos a los documentos alegando que la documentación solicitada contiene datos de carácter personal.

Hay que señalar que este temor está fundado debido a que existe una gran variedad de documentación que está afectada por la protección de datos y más a tenor de la interpretación genérica de lo que se considera dato personal. Tanto la legislación comunitaria como la española consideran que un dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable (artículo 3.a de la LOPDCP) y la jurisprudencia comunitaria sobre protección de datos establece además que toda información que incluya el nombre de una persona es un dato personal a los efectos de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos, incluso así ha de considerarse cuando el objetivo del acceso sea la información sobre un bien o una actividad y no sobre la propia persona¹¹. Pero más allá de los datos personales, la protección del honor también afecta a las personas jurídicas y así se puede ver en la jurisprudencia del Constitucional tal y como afirma Martínez Varela¹²:

el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas...no cabe hablar de la existencia de norma alguna que prohíba a las personas jurídicas de ser sujetos de derechos fundamentales.

⁹ GUICHOT: *op. cit.*

¹⁰ FARIÑA PESTAÑO, DÍAZ FARIÑA y RODRÍGUEZ ACEVEDO: *op. cit.*

¹¹ GUICHOT: *op. cit.* Este autor se refiere a distintas sentencias que afinan en la definición de lo que se consideran datos personales y, entre ellas, las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de noviembre de 1999 (asunto C-209/97) o de 14 de septiembre de 2000 (asunto C-369/98).

¹² MARTÍNEZ VARELA, Manuel: «El derecho al honor y el ejercicio de la libertad de expresión e información. Especial referencia a la jurisprudencia constitucional y civil en el ámbito local», en *El Consultor de los Ayuntamientos*, n.º 4, 2011, pp. 449-470.

Es decir, existe un honor personal que afecta a la esfera familiar y que es atribuible a personas jurídicas. Y para dificultar más aún la cuestión la protección de estos derechos fundamentales resulta que tampoco es igual para todos los sujetos. En efecto, los individuos que ostentan cargos públicos, por el mero hecho de ostentarlos están sometidos al escrutinio de los ciudadanos y la crítica y el conocimiento de las actividades relacionadas con su función deben formar parte del propio cargo. La protección de los derechos fundamentales a que nos referimos encuentra en estos casos su límite en la imputación de hechos delictivos mediante el recurso de la crítica¹³.

Así pues, visto que la normativa de acceso al patrimonio documental impone restricciones cuando está en juego la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, y que la legislación en materia de protección de datos precisamente trata de salvaguardar esos derechos fundamentales, es de suponer que una amplia mayoría de la documentación generada por la administración es susceptible de estar afectada por estas limitaciones. Y así se desprende de las consultas realizadas a la Agencia Española de Protección de Datos (y que esta resuelve en sus informes jurídicos¹⁴) acerca del acceso por parte de investigadores a la información contenida en padrones, libros de registro de defunciones, etc., señalando que la consulta de la misma supone una cesión de datos de carácter personal (artículos 3.i y 11.1 de la LOPDCP). Puesto que las cesiones de datos, en general, implican un consentimiento que debe ser otorgado con carácter previo a la cesión y debe incluir información de la finalidad a la que se destinan los datos que se pretenden recabar (artículo 11 de la LOPDCP), es necesario analizar si existen normas con rango de Ley que incluyan excepciones a este consentimiento obligatorio¹⁵. En este sentido hay que tener en cuenta que la propia normativa de protección de datos permite el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos, estadísticos o científicos (artículo 9 del RD 1720/2007).

Sin embargo, para resolver la cuestión, la Agencia¹⁶ establece un criterio basado en la «documentación histórica» cuya definición se encuentra dentro de la legislación

¹³ Ibídem.

¹⁴ Informe 240/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2008-0240_Acceso-a-los-datos-del-padr-oo-n-de-los-a-n-os-1910-y-1911-a-efectos-de-investigaci-oo-n.pdf.

¹⁵ Existe legislación que habilita a la cesión de datos en los supuestos de investigación histórica o de tratarse de patrimonio documental, por ejemplo: la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la función estadística pública, la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias.

¹⁶ Agencia Española de Protección de Datos: *Alcance del concepto del tratamiento de datos históricos con fines científicos o de investigación*, 2000. Disponible en:

habilitante de la cesión, en este caso la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español. Pues bien, la Agencia se refiere a que la «documentación histórica» está amparada en el artículo 57.1 ya citado de dicha ley y que hace referencia a los datos que no pueden ser públicamente consultados sin que medie consentimiento de los afectados.

A nuestro entender este es un criterio no del todo acertado pues la Ley de Patrimonio define qué debe entenderse por patrimonio documental y no se refiere en exclusiva al concepto de «documentación histórica», estableciendo que son parte constitutiva del patrimonio documental los documentos de cualquier época. Cuestión aparte es que la consulta de estos documentos pueda afectar a la seguridad de las personas, a su honor o a su intimidad. Esta posibilidad es la que debería deducirse, es decir, si la información contenida afecta o no a estos derechos fundamentales porque, a nuestro entender, no todos los documentos que contienen datos de carácter personal atentan contra ellos. Sin embargo, la Agencia no lo ha interpretado así y ha hecho suyos los plazos de la Ley de Patrimonio para la consulta de los documentos con estas características, independientemente de que la información afecte realmente o no al honor, a la intimidad y a la propia imagen (veinticinco años desde su muerte si su fecha es conocida y cincuenta años desde la fecha de la documentación si es desconocida).

Así pues, además de la legislación en materia de acceso y aquella que tiene que ver con la protección de datos, debemos sumar los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos y de los responsables de promover el acceso a los documentos contenidos en los archivos, etc. De hecho, hasta tal punto estos criterios son concluyentes que en los casos en los que no se cumpla con ellos, se da por supuesto que la legislación española no permite la consulta de los documentos si no es con el consentimiento de los titulares. Esto indudablemente provoca conflictos pues se está dando por sentado que los derechos al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen prevalecen por encima de la transparencia administrativa¹⁷ al imponerse unas restricciones al acceso que superan todos los criterios exigibles.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2000-0000_Alcançe-del-concepto-del-tratamiento-de-datos-hist-oo-ricos-con-fines-cient-ii-ficos-o-de-investigaci-oo-n.pdf.

¹⁷ FARIÑA PESTAÑO, DÍAZ FARIÑÁ y RODRÍGUEZ ACEVEDO: *op. cit.*

CONFLICTOS ENTRE DERECHOS

En el apartado anterior ya hemos adelantado los primeros conflictos que surgen entre la necesaria protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el acceso a la información contenida en nuestros archivos.

Aparentemente hay una parte del problema que podríamos solucionar estableciendo el límite sobre lo que se entiende por intimidad u honor que, como hemos dicho, es precisamente el criterio que debería seguir la Agencia de Protección de Datos. En este caso, como afirman Fariña Pestaño, Díaz Fariña y Rodríguez Acevedo¹⁸:

...la condición del fallecimiento parece ser ya suficiente como para pensar que se ha perdido el riesgo de ser afectadas; y si no se conoce ese dato, los veinticinco años a partir de la fecha de los documentos podrían ser, quizás, un plazo adecuado.

Sin embargo, Araújo¹⁹ opina que el derecho al honor de las personas afecta al ámbito familiar y por tanto no puede entenderse desvinculado uno de otro y así lo corrobora el Tribunal Constitucional en su Sentencia 231/1988:

...no cabe dudar que ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen normalmente, y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad.

Por tantom incluso en un supuesto que puede considerarse sencillo surgen diferentes interpretaciones en la doctrina e incluso los responsables de la documentación ofrecen criterios distintos a la hora de permitir el acceso a investigadores en supuestos de hecho similares. Analicemos el caso de la Memoria Histórica, tan en boga en los últimos tiempos. Esta materia se encuentra regulada en la Ley 52/2007 (conocida como Ley de Memoria Histórica) que establece en su disposición adicional octava, que:

...el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta Ley, dictará las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ ARAÚJO DÍAZ DE TERÁN, Mercedes: «Derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto en las comunicaciones», en *Enciclopedia Jurídica La Ley*, tomo VII, pp. 4149-4153.

En aplicación de este precepto también surgen controversias. Existen diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado ante consultas en las que se solicita el acceso a determinados registros: Resolución 2/2008, de 28 marzo, Resolución 5/2008, de 4 abril, y Resolución 18/2009, de 1 septiembre. La primera de ellas deniega a un investigador la expedición de unas certificaciones de defunción existentes en el Registro Civil desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de septiembre de 1936, aunque bien es cierto que sí se le ofrecía la posibilidad de consultar presencialmente los libros de registro. La Resolución 5/2008 estudia un caso similar en el que a un investigador le habían denegado el acceso a los libros de registro de defunciones durante el período de la Guerra Civil y en virtud de la Ley 52/2007 se estima su recurso y se le permite el acceso. Por último, la Resolución 18/2009 resuelve un asunto en el que el investigador solicitaba el acceso a los libros de registro de una localidad sevillana correspondiente al período comprendido entre 1936 y 1980 para estudiar la represión franquista. En este caso, el responsable del Registro Civil le negó el acceso alegando falta de interés legítimo y posible entorpecimiento de prestación del servicio derivado de la falta de espacio en la oficina correspondiente. El investigador interpuso un recurso que resolvió la Dirección General de los Registros y del Notariado, que interpretó que, en general, se debe facilitar el acceso a la información cuando el período de tiempo a que se refiera la petición sea anterior a los últimos veinticinco años (tal y como indica la Ley de Patrimonio) y cuando no existan elementos que permitan considerar deshonrosa la causa de la muerte (se ha establecido que no existe tal deshonra cuando dicha causa esté relacionada con la represión de la guerra civil por motivos políticos). Ahora bien, como en este caso el carácter masivo de la petición de información necesaria para llevar a cabo una investigación histórica referida a un período de varios años no permitía garantizar la protección de la intimidad personal y familiar (en caso de que en alguna inscripción de las consultadas existiera alguna causa de muerte no relacionada con hechos de represión por motivos políticos que pueda representar una connotación negativa), se denegaba el acceso a la información solicitada.

A estas circunstancias hay que sumar, en la misma resolución, la ausencia de interés legítimo de este investigador ya que la Dirección General de los Registros y del Notariado establece que:

...las peticiones de información registral relativas a las inscripciones de los libros de defunción a cargo de los encargados del Registro Civil, se deberá entender que existe interés legítimo...cuando la petición procede del Centro Documental de la Memoria Histórica en ejercicio de sus funciones relativas al fomento de la investi-

gación histórica sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición. Igualmente se habrá de entender que concurre dicho interés legítimo cuando el solicitante acredite que la petición de información se enmarca en investigaciones que hayan obtenido beca o cualquier otro tipo de ayuda o apoyo institucional por parte del citado Centro Documental de la Memoria Histórica o se encuentren sometidos a su tutela o dirección.

Sin embargo, dejar a la elección de los responsables de la documentación la capacidad de decidir si las circunstancias de acceso se consideran legítimas o no, o en su defecto, derivar esta legitimidad a la interpretación legislativa de la Dirección General de los Registros y del Notariado resulta un tanto arbitrario. Por continuar con el ejemplo, se entiende que en los casos de memoria histórica un investigador no adscrito al Centro Documental de la Memoria Histórica o sometido a su tutela o dirección no se encuentra legitimado para investigar sobre estos temas.

Pero si el criterio de la Dirección General de los Registros y del Notariado nos parece arbitrario, analicemos algunas de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos en esta materia, con un posicionamiento más estricto en parte derivado del carácter de la normativa de protección de datos. Ante consultas que plantean la posibilidad de dar acceso a información municipal²⁰ a historiadores y otros investigadores que así lo solicitan, la Agencia entiende que tratándose de documentos públicos u oficiales, como el censo de población, cuando haya concluido el procedimiento administrativo en que se generaron o utilizaron, y habiéndose producido el archivo administrativo de los documentos, pasarán estos, a formar parte del Patrimonio Documental Español. Ahora bien, tras esta afirmación se refiere a las limitaciones establecidas en el artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico. Es decir, que la Agencia vuelve a emplear el criterio de los plazos establecidos en la Ley de Patrimonio. En uno de los casos citados²¹ en el que la consulta se refería al padrón municipal, la resolución indica que como es posible, en la gran mayoría de los casos, determinar o acceder a la fecha de fallecimiento de las personas empadronadas, no es aplicable el criterio subsidiario de que hayan transcurrido cincuenta años desde la fecha de los documentos para el acceso a los mismos sino en aquellos casos en que sea imposible determinar el fallecimiento.

²⁰ Informe 502/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2009-0502_Acceso-por-investigadores-particulares-al-Padr-oo-n-Municipal-de-1931.pdf; e Informe 240/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2008-0240_Acceso-a-los-datos-del-padr-oo-n-de-los-a-n-os-1910-y-1911-a-efectos-de-investigaci-oo-n.pdf.

²¹ Informe 240/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos.

En definitiva, que para que los investigadores puedan consultar los datos del padrón (o de documentos similares) es necesario que confirmen que la persona haya fallecido y que hayan transcurrido, al menos, veinticinco años desde su fallecimiento. Y en los casos de muerte no conocida, pues el periodo subsidiario de cincuenta años. Esto sin duda tiene enormes inconvenientes asociados que ralentizan, en gran medida, el trabajo de un investigador que, por lo general, no dispone de medios para acreditar el fallecimiento de las personas relacionadas con los hechos que pretende investigar, ya que lo que precisamente desea es consultar los registros a los que solicita acceder para obtener dicha información.

Otro de los informes jurídicos²² se refiere a los datos contenidos en los Libros Eclesiásticos de una determinada parroquia, referidos a los años 1737 a 1856. El Arzobispado responsable de los archivos había informado a un investigador de que antes de permitirle el acceso iba a realizar una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos para asegurar la legalidad del acceso a esta información especialmente protegidos. Adelantemos que la Agencia responde en sentido de facilitar el acceso a estos datos pero antes realiza un interesante análisis del carácter especial que tienen por su capacidad de contener información sobre la vida religiosa de las personas y en torno a la finalización de la protección cuando se produce el fallecimiento del afectado. Sin embargo en este caso no se menciona la Ley de Patrimonio Histórico aunque la documentación sobre la que se solicita acceso está incluida en la definición de patrimonio documental.

Pues bien, no se trata de una crítica a la actuación de la Agencia dando respuesta a esta consulta, pero la realidad es que se solicita el acceso a una documentación cuya fecha más reciente es 1856. Poco puede afectar la información de esa época al honor o a la seguridad de dichas personas ni tampoco a sus familiares. Para resolver este tipo de situaciones opinamos que una medida bastante sencilla podría ser la de fijar un periodo de referencia a partir del cual la documentación sea de libre consulta. Si suponemos que no hay españoles que vivan más de 120 años y sumamos a esos 25 adicionales (los fijados en la Ley de Patrimonio para la consulta de documentos que podrían afectar a los derechos fundamentales a los que nos hemos estado refiriendo) tenemos que la documentación anterior a 1867 debe ser de consulta libre y sin restricciones. Evidentemente cada año que transcurra implicará añadir un año más al perio-

²² Informe 378/2008 de la Agencia Española de Protección de datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2008-0378_Acceso-a-libros-de-bautismo-para-fines-hist-oo-ricos.pdf.

do de referencia establecido. Y aún así nos parece un criterio excesivamente restrictivo.

Pero, evidentemente, toda la información sobre la que se solicita acceso, no ha de estar necesariamente relacionada con investigación histórica: hay casos en los que se investigan cuestiones de actualidad. También hay ejemplos de informes de la Agencia de Protección de Datos sobre estas cuestiones. El informe 317/2009²³ plantea si la Cátedra de Accesibilidad, Arquitectura y Diseño de una universidad española puede solicitar a otras universidades los datos de estudiantes con discapacidad matriculados en las mismas, con objeto de contactar con ellos para la realización de un estudio.

Puesto que los datos personales que solicita dicha universidad se circunscriben a los alumnos que tengan la condición de minusválidos, y estos datos de salud, tienen un régimen de especial protección en Ley Orgánica 15/1999 (véase el artículo 11) y, además como no concurren circunstancias que conlleven una de las excepciones recogidas, pues en ese caso no se deniega el acceso pero se exige la autorización expresa de la cesión por parte de los titulares, lo cual convierte cualquier estudio que se pretenda llevar a cabo en prácticamente inabordable.

Pero visto este nivel de protección de datos tan exigente ¿existe alguna circunstancia en la que un ciudadano esté legitimado para acceder a documentos en los que también aparezcan datos personales de terceros? Existen casos que tienen asociados interesantes informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos²⁴. Por ejemplo, una consulta que plantea si es conforme a Derecho la transmisión de los datos contenidos en el expediente del proceso selectivo en el que el ciudadano interesado en el acceso participó, y que basa su solicitud en lo dispuesto en la Ley 30/1992.

Efectivamente, el opositor tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos (artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992). Parece pues que en este caso no hay lugar a dudas, el participante en el proceso tiene la condición de interesado y debe poder tener acceso al expediente completo de la prueba de oposición, incluidos los exámenes y calificaciones de otros

²³ Informe 317/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portaWebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2009-0317_Cesi-oo-n-dato-de-minusval-ii-a-de-alumnos-entre-Universidades-P-uu-blicas-para-estudio-o-investigaci-oo-n.-Consentimiento.pdf.

²⁴ Informe jurídico 610/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portaWebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2008-0610_Acceso-a-expediente-de-proceso-de-selecci-oo-n-terminado-por-uno-de-los-candidatos.-Aplicaci-oo-n-LRJ---PAC..pdf

participantes en el proceso. Y además cabe señalar que el expediente no tiene que estar finalizado al tener el ciudadano la condición de interesado en el proceso²⁵. La única pega que cabe indicar, que si cada vez que un opositor en estas circunstancias debe efectuar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos o interponer un recurso contencioso-administrativo, la transparencia de estos procesos selectivos queda en evidencia y, por consiguiente,, su efectividad en entredicho debido a que la resolución del conflicto de acceso puede prolongarse más allá de la resolución del propio proceso selectivo. En una situación así, los intereses del ciudadano (en caso de llevar razón) estarían seriamente afectados²⁶.

Como vemos, en lo tocante al acceso, uno de los principales que encontramos es la escasez de desarrollo legislativo²⁷, su dispersión y la existencia de una normativa casi ininteligible en lo referente a la protección de datos. Y a todo esto hay que sumar la necesidad aún no resuelta de compatibilizar derechos e intereses (que derivan casi siempre en limitaciones impuestas al derecho de acceso); las posturas contradictorias que mantienen los responsables de dar acceso a los archivos; y la visión restrictiva en la aplicación de la normativa de protección de datos que, además, no deja claro si debe prevalecer la legislación de acceso, la legislación sobre protección de datos o si es necesario un análisis caso por caso atendiendo al interés en juego y al principio de finalidad²⁸. Estas posturas las hemos ejemplificado en los informes elaborados tanto por la Agencia Española de Protección de Datos como por la Dirección General de los Registros y del Notariado y que han mostrado como resultado que, para que el ciudadano pudiera acceder a la documentación, era en muchos casos exigible su condición de investigador y, en ocasiones, incluso la necesidad de estar adscrito a un determinado centro investigador.

Pero por si fuera poco, hay que añadir la confusión legislativa en torno a los términos relacionados con el acceso. Pongamos por ejemplo el de la Ley de Patrimonio y su falta de identificación clara de la documentación que contiene datos de carácter personal y que puede afectar al derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Esto

²⁵ «Derecho de acceso de los interesados en un proceso selectivo a todos los documentos que forman parte del expediente», en *La Administración Práctica*, julio de 2010, pp. 715-716.

²⁶ Moraga Guerrero analiza otros casos en los que teniendo la condición de interesados se denegaba el acceso de los ciudadanos a la información pública. MORAGA GUERRERO, Eva: *Cuando lo Público no es público: ¿Por qué se necesita una ley de acceso a la información pública en España?: Informe sobre las solicitudes y casos en seguimiento por Access Info Europe en relación con la legislación española actual y la práctica de la Administración en España*. Madrid: Access Info Europe, 2008. Disponible en: http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/Coalicion_Pro-Acceso/Coalicion-Pro-Acceso-Cuando-lo-publico-no-es-publico.pdf.

²⁷ FARIÑA PESTAÑO, DÍAZ FARIÑA y RODRÍGUEZ ACEVEDO: *op. cit.*

²⁸ GUICHOT: *op. cit.*

es susceptible de interpretaciones que derivan en suponer que cualquier documento que contenga datos personales se considera que afecta a estos derechos fundamentales. Por su parte, la Ley 30/1992 establece unos requisitos para la consulta de la documentación administrativa, más concretamente: que el documento a consultar forme parte de un expediente que se encuentre en un archivo administrativo, que el expediente corresponda a un procedimiento y que el procedimiento esté terminado (artículo 37.1 de la Ley 30/1992). En este sentido Moraga²⁹ ha analizado el significado de estos requisitos identificando problemas asociados de interpretación, por un lado porque la ley no establece qué se entiende por expediente administrativo y por otro porque tampoco se determina cuándo se da por finalizado, con lo que el ciudadano acaba perdido entre los formalismos legales que condicionan el acceso.

Por todos estos motivos, desde los sectores responsables de la documentación y que son precisamente los encargados de facilitar el acceso, se viene demandando una ley de acceso a la documentación y la constitución de comisiones calificadoras de documentos administrativos que diriman los aspectos controvertidos del derecho de acceso³⁰. Hay autores que incluso definen unas características de esta ley de acceso³¹ en consonancia con manifiestos europeos de carácter internacional como el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos³². Esta normativa de acceso permitiría eliminar situaciones en las que el tiempo transcurrido entre la petición de información, la denegación de acceso, el recurso y, finalmente la resolución del asunto por la instancia correspondiente se demora entre cinco o siete años³³. Pero también se dan circunstancias en las que la administración responsable no ofrece respuesta alguna con lo que al ciudadano solo le queda la opción de recurrir su

²⁹ MORAGA GUERRERO: *op. cit.*

³⁰ FARIÑA PESTAÑO, DÍAZ FARIÑA y RODRÍGUEZ ACEVEDO: *op. cit.*

³¹ MORAGA GUERRERO: *op. cit.* Se establece una serie de principios que una ley de acceso debería incorporar: principio de publicidad en cuanto a que la información pública debe ser accesible por los ciudadanos; acceso universal, es decir, todas las personas deben tener acceso a la información; toda la información debe ser accesible salvo contadas excepciones establecidas de forma clara en la legislación; todas las administraciones son susceptibles de que la información sea solicitada; no se tienen que exigir condiciones especiales para el acceso a la información (como la cualidad de investigador); la Administración debe dar respuestas claras y rápidas; y, por último, todo el proceso debe ser sencillo y la Administración debe informar sobre él.

³² Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. Disponible en: http://www.access-in-fo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Documents_CofE_es.pdf.

³³ LÓPEZ-MEDEL BASCONES, Jesús: «El derecho a la información medioambiental», en *Revista Española de Derecho Administrativo*, n.º 144, 2009, pp. 667-678.

silencio interponiendo recursos contencioso-administrativos ante los tribunales³⁴. Por este motivo, una sentencia favorable varios años después puede provocar que la solicitud de información que la motivó ya no sea necesaria.

A lo largo de este artículo hemos venido hablando del acceso de los investigadores a los documentos pero ¿son diferentes los investigadores al resto de ciudadanos? Pues debemos responder a esta cuestión de forma afirmativa: los investigadores son diferentes en el acceso a la información al resto de ciudadanos y esto es así porque se ha establecido un criterio, a nuestro entender artificial, de finalidad en cuanto al uso de la información. Esto choca directamente con el principio general establecido en la Ley de Patrimonio de que la consulta de los documentos del patrimonio documental sea, en general libre y que las restricciones sean excepciones a la norma y no al revés (artículo 57.1.a de la Ley de Patrimonio Histórico Español).

Es, por ello, que el derecho de acceso a la documentación debe reconfigurarse como una nueva dimensión del derecho a la información³⁵ que no ha de limitarse en exclusiva a los medios de comunicación, sino que inmersos en una era digital, con las posibilidades actuales de las tecnologías de la información y del conocimiento, los ciudadanos deben tener, más que nunca, nuevas formas de acceso a la información sobre la actuación de las administraciones y acerca de la gestión de los servicios que les afectan.

CONCLUSIONES

Alcanzar una administración pública transparente y una democracia más participativa implica permitir el acceso a los expedientes en cuyos procedimientos los ciudadanos tienen la condición de interesados y, al mismo tiempo, a la información de los poderes públicos que desvela su funcionamiento y forma de actuar.

El patrimonio documental se refiere, de un modo amplio, a los documentos generados en cualquier época por las administraciones públicas y su consulta es, en general, libre. Las restricciones establecidas deben ser excepciones fundadas de este principio, evidentemente por razones de seguridad de las personas, honor e intimidad. Pero no debe considerarse (la protección de estos derechos fundamentales) como un

³⁴ MORAGA GUERRERO: *op. cit.*

³⁵ Díez Bueso («La relevancia pública en el derecho a la información: algunas consideraciones», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 66, 2002, pp. 213-238) indica que el transcurso del tiempo ha modificado el entendimiento de la libertad de expresión. En este sentido se han ido uniendo nuevos elementos como la prohibición de censura previa y la inclusión del derecho a la información. Esta evolución del concepto obliga a que, en este caso no sea posible que el derecho de acceso no aparezca incluido como una vertiente más del derecho a la información en una sociedad que cada vez demanda más información sobre el desarrollo de las actividades de sus representantes legítimos.

criterio absoluto ya que en ocasiones ha de prevalecer el acceso en pro del interés general.

Es necesario concienciar a las administraciones y a los titulares de la documentación constitutiva del patrimonio documental de que son depositarios de la misma y responsables de su custodia, pero no dueños de la misma y que, por tanto, solo pueden imponer las restricciones absolutamente necesarias al acceso que han de venir fijadas en la normativa correspondiente.

Los principales límites al acceso a la documentación vienen impuestos por el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Los responsables de facilitar el acceso a la documentación suelen negarlo a los ciudadanos alegando el cumplimiento de la normativa de protección de datos, llegando en ocasiones a abusar y traspasar lo legalmente establecido.

Existen diversos criterios para el acceso a la documentación determinados por la dispersión de la legislación que regula el tema y por la generalización de una práctica que debe considerarse preocupante, esto es, la de la necesidad de justificar un interés legítimo para obtener acceso a la documentación. Este interés legítimo suele estar relacionado con el desarrollo de investigaciones pero, en determinados casos tampoco es suficiente si la investigación no está adscrita a determinados centros.

Es necesaria una legislación en materia de acceso que regule los aspectos básicos, establezca plazos únicos y unifique los criterios que emplean los responsables de facilitar el acceso a la documentación y, además, que coordine el principio de acceso con los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Además se debe estudiar la inclusión del derecho de acceso dentro de la perspectiva del derecho a la información.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Española de Protección de Datos: *Alcance del concepto del tratamiento de datos históricos con fines científicos o de investigación*, 2000. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2000-0000_Alcance-del-concepto-del-tratamiento-de-datos-hist-ooricos-con-fines-cient-ii-ficos-o-de-investigaci-oo-n.pdf.
- ARAÚJO DÍAZ DE TERÁN, Mercedes: «Derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto en las comunicaciones», en *Enciclopedia Jurídica La Ley*, tomo VII.
- CASTILLO BADAL, Ramón: «Acceso a archivos y documentos administrativos», en *Enciclopedia Jurídica La Ley*, tomo I.
- Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. Disponible en: http://www.access-in-fo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Documents_CofE_es.pdf.
- «Derecho de acceso de los interesados en un proceso selectivo a todos los documentos que forman parte del expediente», en: *La Administración Práctica*, julio de 2010.
- «Desglose presupuestario», en: *Casa de Su Majestad el Rey*, 28 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.casareal.es/noticias/news/20111228_desglose_presupuestario-ides-idweb.html.
- DÍEZ BUESO, Laura: «La relevancia pública en el derecho a la información: algunas consideraciones», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 66, 2002.
- FARIÑA PESTAÑO, Febe I.; DÍAZ FARIÑA, Fernando A. y RODRÍGUEZ ACEVEDO, José M.: «¿Archivos al servicio del ciudadano? Paradojas y contradicciones de una legislación restrictiva e ineficaz», en *Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)*. Disponible en: <http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/Articulos-Informes/ComunicacionJMRA.pdf>.
- GUICHOT, Emilio: «Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos personales», en *Revista de Administración Pública*, n.º 173, 2007.
- Informe 240/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2008-0240_Acceso-a-los-datos-del-padr-oo-n-de-los-a-n-os-1910-y-1911-a-efectos-de-investigaci-oo-n.pdf.
- Informe 317/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdfs/2009-0317_Cesi-oo-n-dato-de-minusval-ii-a-de-alumnos-entre-Universidades-P-uu-blicas-para-estudio-o-investigaci-oo-n.-Consentimiento.pdf.

Informe 378/2008 de la Agencia Española de Protección de datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf/s/2008-0378_Acceso-a-libros-de-bautismo-para-fines-hist-oo-ricos.pdf.

Informe 502/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf/s/2009-0502_Acceso-por-investigadores-particulares-al- Padr-oo-n-Municipal-de-1931.pdf.

Informe 610/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf/s/2008-0610_Acceso-a-expediente-de-proceso-de-selecci-oo-n-terminado-por-uno-de-los-candidatos.-Aplicaci-oo-n-LRJ---PAC..pdf.

LÓPEZ-MEDEL BASCONES, Jesús: «El derecho a la información medioambiental», en *Revista Española de Derecho Administrativo*, n.º 144, 2009.

MARTÍNEZ VARELA, Manuel: «El derecho al honor y el ejercicio de la libertad de expresión e información. Especial referencia a la jurisprudencia constitucional y civil en el ámbito local», en *El Consultor de los Ayuntamientos*, n.º 4, 2011.

MORAGA GUERRERO, Eva: *Cuando lo Público no es público: ¿Por qué se necesita una ley de acceso a la información pública en España?: Informe sobre las solicitudes y casos en seguimiento por Access Info Europe en relación con la legislación española actual y la práctica de la Administración en España*. Madrid: Access Info Europe, 2008. Disponible en: http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/Coalicion_Pro-Acceso/Coalicion-Pro-Acceso-Cuando-lo-publico-no-es-publico.pdf.

Registro de actividades, bienes y rentas de los diputados. Congreso de los Diputados, 2011. Disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/registro_interes.es.

Registro de actividades, bienes y rentas de los senadores. Senado, 2011. Disponible en: http://www.senado.es/legis10/senadores/ra_lista.html.

SENDÍN GARCÍA, Miguel Á.: «El derecho de acceso a los documentos administrativos: un instrumento esencial para la participación ciudadana. Derecho estatal y local», en *Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica (REALA)*, n.º 294-295, 2004.